

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

DEMANDANTE	: GUILLERMO LÓPEZ YEPES
DEMANDADO	: COLPENSIONES.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-013-2023-00105-01
RADICADO INTERNO	: 359-23
DECISIÓN	: REVOCA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 396

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia el recurso de apelación y el grado de consulta a favor de Colpensiones, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 2213 del 13 de junio de 2022, la providencia en segunda instancia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE que le asiste derecho a la reliquidación de su pensión por vejez, según le resulte más favorable, con el promedio de lo cotizado durante los últimos diez años o durante toda la vida laboral, pero con tasa de reemplazo del 80% y en consecuencia se CONDENE a Colpensiones a:

1. Reconocerle y pagarle incluso de manera retroactiva, el valor resultante de la reliquidación de la pensión por vejez con tasa de reemplazo del 80%.
2. Intereses moratorios y/o indexación, y las costas del proceso.

Como supuestos facticos manifestó que el señor López Yepes cuenta a la fecha con 65 años, toda vez que nació el 26 de junio de 1957, y que para el mes de junio de 2019 fecha de cumplimiento de la edad para acceder a la pensión por vejez, ya contaba con más de (2.030) semanas cotizadas ante Colpensiones.

Que en virtud de Resolución SUB-208806 del 03 de agosto de 2019, notificada el día 05 del mismo mes y año, Colpensiones reconoció la pensión por vejez al demandante, determinando un IBL en cuantía de \$9'130.411, a partir de 2034 semanas cotizadas, fijando una tasa de reemplazo del 74.99%, misma que determinó una primera mesada pensional para el año 2019 en cuantía de \$6'846.895, a partir del 01 de julio del mismo año.

Que al momento de liquidar la prestación pensional por vejez Colpensiones cometió un error aritmético que condujo a una cuantificación deficitaria del IBL, la tasa de reemplazo y el valor de la pensión, pues las 734 semanas cotizadas en exceso a las 1300 le permiten al señor López Yepes alcanzar una tasa de reemplazo del 80%.

Que conforme a la proyección pensional adjunta a la demanda, efectuada por el abogado y actuario Darwin de Jesús Ortega Botero, atendiendo el promedio de las cotizaciones efectuadas por el señor López Yepes durante los últimos 10 años, conforme a una tasa de reemplazo del 80%, el valor de su primera mesada pensional para el año 2019 debió ascender a **\$ 7'303.620**, cifra que actualizada al año 2023 equivale a \$9'203.595, sumas ostensiblemente superiores a las reconocidas y pagadas por Colpensiones.

Que por lo anterior el 17 de noviembre de 2022 en la oficina de Colpensiones Medellín – Centro occidente, bajo consecutivo 2022_16923257 presentó reclamación administrativa, solicitando reliquidar la pensión por vejez con tasa de reemplazo del 80%, así como los intereses moratorios y/o la indexación de las sumas adeudadas, por lo que dicha entidad mediante Resolución SUB 58414 del 01 de marzo de 2023 Colpensiones denegó la solicitud de reliquidación prestacional aduciendo que al señor López Yepes únicamente le asiste derecho a una tasa de reemplazo del 74.99% y, por ende, su pensión fue cuantificada conforme a derecho.

RESPUESTA COLPENSIONES

Esta entidad dio respuesta manifestando que el demandante a la presentación de la demanda cuenta con 65 años, por haber nacido el 26 de junio de 1957, y acepta que Colpensiones mediante la Resolución SUB 208806 del 03 de agosto de 2019, notificada el día 05 del mismo mes y año, reconoció la pensión por vejez al demandante, con un IBL de \$9'130.411, con 2034 semanas cotizadas, y una tasa de reemplazo del 74.99%, misma que determinó una primera mesada pensional para el año 2019 en cuantía de \$6'846.895, a partir del 01 de julio del mismo año. Acepta además la solicitud de reliquidación presentada y la respuesta negativa dada a la misma. No aceptó los demás hechos, se opuso a la prosperidad de todas las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación de pagar reajuste, reliquidación y retroactivo pensional, inexistencia de la obligación, inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios, intereses moratorios por reliquidaciones, improcedencia de la indexación, buena fe de Colpensiones, imposibilidad de condena en costas, prescripción, compensación, excepción innominada, y la genérica.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 14 de noviembre de 2023, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer y pagar al señor GUILLERMO LÓPEZ YEPES la suma de \$25.944.968 a título de retroactivo de reajustes pensionales liquidado desde el 17 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2023, y precisó que a partir del 1 de noviembre de 2023, COLPENSIONES continuará pagando al demandante una mesada pensional equivalente a la suma de \$9.204.489 sin perjuicio de la mesada adicional de diciembre y los incrementos de Ley.

CONDENÓ a COLPENSIONES a pagar al señor GUILLERMO LÓPEZ YEPES los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre los reajustes pensionales mencionados, desde el día 18 de marzo de 2023 hasta el momento del pago.

AUTORIZÓ a COLPENSIONES a efectuar del retroactivo de la reliquidación pensional los descuentos, con destino al sistema de seguridad social en salud. DECLARÓ PROBADA parcialmente la excepción de prescripción de los derechos causados y exigibles con anterioridad al 17 de noviembre de 2019.

CONDENÓ en costas a COLPENSIONES y en favor de la parte demandante y fijó como agencias en derecho la suma de \$1.816.000.

RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de Colpensiones interpone recurso de apelación frente a la condena de los intereses moratorios indicando que considera que dichos intereses de que trata el artículo 141 de la ley 100 de 1993 con base a la jurisprudencia y a la ley empiezan solo a causarse para la entidad a partir de la fecha en que la norma ordena el desembolso efectivo del monto de la mesada, esto es, a partir del vencimiento de los 6 meses que incluye cuatro meses para el reconocimiento más dos meses adicionales que se tiene para incluir en nómina las pensiones de vejez e invalidez.

Que además el objeto de la norma en comento es resarcir el atraso en el pago de las mesadas pensionales pero que nunca el legislador estableció en la normativa en cita de forma genérica una sanción por el retraso en el pago de otras supuestas obligaciones pensionales a cargo de las entidades de seguridad social, y que, por lo tanto, la finalidad de la norma es resarcir la demora en el pago de la mesada pensional una vez el derecho sea radicado o ingresado al patrimonio del pensionado.

Que además sin perjuicio de los argumentos expuestos debe tenerse en cuenta que en la sentencia SL 4338 del 2019 radicación 62180, la Corte Suprema de Justicia en la sala de casación laboral dejó expresadas las razones por las cuales se predica la improcedencia de la sanción establecida en el artículo 141 de la ley 100 de 1993 para las reliquidaciones de pensiones como la que se debate en este proceso, y que además la Corte Constitucional en la sentencia T 586 del 2012 también mantiene dicha postura. Por lo anterior solicita la revocatoria de los intereses moratorios.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de la parte demandante allega escrito de alegatos reiterando los argumentos ya expuestos a lo largo del proceso relacionados con la procedencia del reajuste solicitado y la condena a los intereses moratorios.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar en consulta a favor de Colpensiones y conforme al recurso de apelación interpuesto: i) Si hay lugar al reajuste pensional solicitado por el demandante, a los intereses moratorios, y las costas del proceso.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que el demandante GUILLERMO LÓPEZ YEPES nació el 26 de junio de 1957, (fls 12 PDF 02), y solicitó a Colpensiones el 26 de junio de 2019 el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, por lo que dicha entidad a través de la Resolución SUB-208806 del 03 de agosto de 2019, reconoció dicha prestación a partir del 01 de julio de 2019, en cuantía de \$6.846.895, (fls 29 a 39 PDF 02).

Así mismo no existe discusión que para el reconocimiento de la pensión de vejez se tuvo en cuenta un total de 2.034 semanas cotizadas, un IBL de **\$9.130.411** al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 74.99%, para una mesada pensional de \$6.846.895, (fls 29 a 39 PDF 02).

Se encuentra probado igualmente que el demandante el 17 de noviembre de 2016 solicitó el reconocimiento de la reliquidación pensional y Colpensiones mediante Resolución con radicado No. 2022_16923257, resolvió de forma negativa dicha solicitud, (fls 52 a 63 PDF 02).

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la liquidación de la pensión de vejez.

Pretende la parte demandante el reajuste de la pensión de vejez aplicando al más favorable, una tasa de reemplazo de 80% conforme lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 100 de 1993 por haber cotizado un total de 2.034 semanas

Respecto al tema objeto de estudio establece el artículo 34 de la ley 100 de 1993 lo siguiente:

“ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$, donde:

r = porcentaje del ingreso de liquidación.

s = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima”.

Para el caso bajo estudio, no hay duda alguna que la prestación reconocida fue liquidada conforme lo establece el artículo 34 de la ley 100 de 1993, modificada por el artículo 10 de la ley 797 de 2003, el cual señala que la tasa de reemplazo corresponde al aplicar la fórmula $R=65.5-0.5(s)$.

Ahora, para un mayor análisis, debe explicarse cómo se despeja la fórmula planteada, debiéndose entender que “s” es el número de salario mínimos para el año 2019 (\$828.116) que caben en el IBL \$9.130.411, lo cual arroja un resultado de 11.02, que en principio da una tasa de reemplazo del **59.99%** así:

$$\begin{aligned} R &= 65.5 - 0.50 (\$9.130.411 / \$828.116) \\ R &= 65.5 - (0.5 * 11.02) \\ R &= 65.5 - 5.51 \\ R &= \mathbf{59.99\%} \end{aligned}$$

En orden de lo anterior la norma en comento dispone, que *“A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima.”*

Teniendo en cuenta lo anterior, la norma da posibilidad de incrementar ese porcentaje, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas en un 1.5%.

Así pues, en el presente caso, para el año 2019 como fecha de causación de la pensión, las semanas mínimas requeridas eran 1.300, y el demandante cotizó un total de 2.034 semanas, lo que equivalen a **734 semanas adicionales**; y si dividimos las 734 semanas adicionales entre 50, dan un total de 14¹, que multiplicado por 1.5% arroja un **21%**.

¹ Esta cifra debe arrojar un número entero, ya que solo se deben tener en cuenta el grupo de 50 semanas adicionales a las mínimas sin proporción alguna.

En este sentido, al igual que lo señaló el juez del conocimiento, se puede decir que la tasa de reemplazo sería el resultado de la sumatoria: del **59.99%** (resultado que nos dio la fórmula) + **21%** (resultado de las semanas adicionales), que arroja un porcentaje final del **80.99%**, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la normativa en cita solo permite como límite máximo de tasa de reemplazo el 80%, por lo que será este monto porcentual del 80% el que se le debe aplicar al IBL.

Es necesario advertir, que esta Sala del Tribunal era del criterio que cuando se superen las 500 semanas adicionales a las 1.300, es decir, cuando el afiliado cotizaba más de 1.800 semanas, el tope de semanas adicionales que se podía adoptar, no podría superar el **15%**, al señalarse que este valor se extrae de la diferencia que existen entre los montos que trae el artículo 34 de la ley 100 de 1993, ello es, diferencia entre del **65%** al **80%**; no obstante, después de un análisis del estudio de la norma, se recoge tal postura, basándose en los argumentos que a continuación se exponen, y compartiendo lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3501-2022.

Y es que, no puede perderse de vista que el artículo 10° de la ley 797 de 2003, el cual modificó el artículo 34 de la ley 100 de 1993, como límite máximo para la tasa de reemplazo solo impuso el 80 %, *“sin indicar rango alguno de oscilación”*; nótese además que el aparte de dicha norma, que refiere a *“... en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo ...”*, alude a que entre mayor sea el ingreso base de liquidación –IBL-, menor será la tasa de reemplazo. Ello obedece a la fórmula $R=65.5-0.5(s)$, donde se observa que entre más alto sea el IBL, el valor a restar de la fórmula será más elevado, generando como consecuencia una tasa más baja; no obstante, pretender, además de lo ilustrado, que también se deba limitar la tasa de reemplazo en un máximo de 15 %, se tornaría en una decisión que castigue *“... dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna...”*

Pretender entonces limitar la tasa de reemplazo en un máximo de 15 % haría ver que el límite máximo del 80 % de que trata la norma en comento, no tenga utilidad alguna. Ello se debe a que la única persona que aparentemente se

vería beneficiada de tal porcentaje sería aquella que cuente con un IBL del salario mínimo legal mensual; sin embargo, atendiendo a lo regulado en el artículo 14 de la ley 100 de 1993, la pensión no se otorgaría con una tasa del 80 %, sino que se reajustaría al mínimo legal.

Asimismo, en la citada sentencia SL3501-2022, frente al límite de la tasa de reemplazo de que trata el artículo 10° de la ley 797 de 2003, señaló:

“Así mismo, la norma también contempla un monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% del ingreso base de liquidación, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula indicada, sin embargo, la parte final del mencionado artículo 34 de forma expresa enfatiza en que, “El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación”, pero en este caso, sin indicar rango alguno de oscilación.

Ahora bien, para la Corte lo lógico es, como lo señaló el legislador, calcular el monto inicial de la pensión conforme a la tasa de reemplazo variable en función del nivel de ingresos de cotización, de suerte que, el monto máximo es directamente proporcional al número de cotizaciones adicionales a las mínimas requeridas, es decir, la tasa de reemplazo pende del nivel de ingresos del afiliado y del monto máximo del número de semanas cotizadas; no obstante, las cotizaciones efectuadas a partir del porcentaje máximo del 80% no se computan, ni procede su devolución, en virtud del principio de solidaridad, expresado en ese tope porcentual sobre el límite de salarios mínimos a los que puede llegar el monto de la prestación pensional otorgada por el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, con las reformas y adiciones legales ya enunciadas.

En efecto, la fórmula decreciente estableció que para determinar la tasa de reemplazo se resta a 65.50 los salarios mínimos contenidos en el IBL en cada caso, por tanto, si se vuelve a utilizar ésta para calcular el monto máximo de la pensión, se estaría tomando el nivel de ingresos de cotización para disminuir o castigar dos veces el monto de la pensión, lo cual no tiene justificación alguna, pues con la fórmula se pretende desincentivar el aumento injustificado del ingreso base de cotización, pero en manera alguna limitar el número de semanas necesario para alcanzar el monto máximo de la pensión establecido por la misma norma, salvo la del tope legal ahora vigente de 25 SMMLV.

(...)

Por otro lado, nótese que el incremento de la tasa de reemplazo en un 1.5% del ingreso base de liquidación, por cada 50 semanas adicionales a las mínimas requeridas, corresponde a una forma de estimular el trabajo productivo, como valor fundante del Estado Social de Derecho, dado que el trabajo “es ciertamente un derecho humano

(Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto o la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal. Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente de la construcción de la nueva legalidad” (CC C-542-1992).

(...)

Ahora, desde la perspectiva de la regulación de la pensión de vejez, la concepción de la idea se basa en que el monto máximo porcentual de la prestación puede ser limitado en un régimen de aseguramiento social, como lo es el contemplado por el Título II, Capítulo I, de la Ley 100 de 1993, definido como un régimen solidario de prestación definida, en el cual los afiliados de mayores ingresos se solidarizan con aquellos de ingresos menores, a través de las aportaciones que realizan en un fondo común de naturaleza pública para garantizar el pago de las pensiones, señalando los montos mínimos y máximos para su reconocimiento, para lo cual el legislador estableció varios mecanismos con la finalidad de evitar pensiones excesivas que puedan poner en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema y, de esta manera, contribuir a la búsqueda de la realización de la solidaridad como principio fundamental de la seguridad social contenido en el artículo 48 Constitución Política que, a su vez, fue desarrollado por el literal c) del artículo 2 de la Ley 100 de 1993, al definirlo como: “la práctica de la mutua ayuda entre las personas, las generaciones, los sectores económicos, las regiones y las comunidades bajo el principio del más fuerte hacia el más débil.

(...)

Lo anterior denota la voluntad del legislador por imponer una mayor base de cotización para los ingresos más altos, pero restringiendo el límite máximo de la pensión a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes con el fin de evitar desigualdades e inequidades en el reconocimiento de las pensiones que, a su vez, puedan afectar la viabilidad del sistema.

Como quedó visto, la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003 y el Acto Legislativo 01 de 2005, adoptaron unas reglas con el propósito de evitar distorsiones en el monto de las pensiones que reconoce el régimen de prima media con prestación definida, así: i) una tasa de reemplazo para la pensión de vejez calculada con una fórmula decreciente en función del nivel de ingresos de cotización; ii) un incremento del monto de la pensión en función del número de semanas cotizadas, adicionales a las mínimas requeridas; iii) un monto máximo de la pensión de vejez, que no podrá ser superior al 80% del ingreso base de liquidación; iv) un límite a la base de cotización de 25 salarios mínimos legales, sin perjuicio del aumento hasta de 45 smlmv; y v) la prohibición de pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

De acuerdo con lo anterior, no existe duda alguna que el actor puede entrar a disfrutar de una tasa de reemplazo, del **80%** como se dijo en la sentencia de primera instancia, razón por la cual se CONFIRMARA la sentencia de primera instancia que condenó al retroactivo pensional por concepto de reajuste desde el 17 de noviembre de 2019 hasta el 31 de octubre de 2023 en la suma de \$25.944.968.

2. De los intereses moratorios.

En cuanto a los intereses moratorios, tenemos que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 al regular la aplicación de los intereses moratorios, indica:

“INTERESES DE MORA. A partir del 1o. de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectuó el pago” (Negritas fuera del texto).

Partiendo de lo anterior debe advertirse que esta Sala era de la posición que los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993 no eran procedentes cuando de reliquidaciones o reajustes se trata sino solo cuando se presentaba mora en el pago total de las mesadas pensionales, sin embargo dicha posición ha sido replanteada acogiendo los argumentos expuestos por la Corte Constitucional en sentencia SU 063 de 2023 donde se deja claro que dichos intereses si son procedentes para reajustes o reliquidaciones pensionales.

No obstante, lo anterior también debe tenerse en cuenta que la imposición de dichos intereses no procede de forma automática y en algunos casos tal y como lo ha reconocido la Sala de Casación Laboral, se presentan ciertas circunstancias en las cuales el incumplimiento del plazo legal para dar respuesta no da lugar al cobro de los intereses moratorios, tales como:

- (i) si las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen justificación porque encuentran respaldo normativo, por ejemplo, cuando al momento de la solicitud de la prestación a la entidad administradora no se cumple con los requisitos para acceder a ella, pero aquellos son satisfechos en el transcurso del proceso judicial;

- (ii) (ii) cuando se presenta suspensión del trámite por controversia entre los beneficiarios de la prestación en los casos de pensión de sobreviviente;
- (iii) (iii) cuando se presenta un cambio jurisprudencial entre el momento de la decisión administrativa y en el que se adopta la decisión judicial;
- (iv) (iv) cuando se reconoce por inaplicación del principio de fidelidad y
- (v) (v) “el reconocimiento del derecho se da con venero en una acción de tutela que emana en virtud de una interpretación del principio de la condición más beneficiosa, por vía jurisprudencial, que difiere de la línea de pensamiento de esta Sala”. También se consideraba una de tales circunstancias los casos de reliquidaciones y reajustes; sin embargo, en ello consistió el cambio de jurisprudencia que se cuestiona en sede de tutela.

Partiendo de lo anterior considera la Sala que si bien en reajustes o reliquidaciones es posible aplicar la sanción moratoria del artículo 141 de 1993 para el caso bajo estudio no habría lugar a imponer dicha sanción en la medida que el reajuste pretendido se concede con fundamento en el cambio jurisprudencial y en la interpretación que de ello se ha hecho respecto a la forma de aplicar la liquidaciones pensional en los términos del artículo 34 de la ley 100 de 1993 y la formula decreciente en el contenido cuando se superan las semanas mínimas exigidas por la ley y se tiene derecho al porcentaje por semanas adicionales, tanto es así que anteriormente esta Sala era de la posición de negar esta clase de reajustes.

Por lo anterior lo legal y pertinente será REVOCAR la sentencia de primera instancia que condenó a Colpensiones al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, y en su lugar SE CONDENA a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la indexación de las sumas reconocidas en la sentencia objeto de reajuste pensional desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta el momento en que se realice el pago total de la obligación.

Sin costas en esta instancia por prosperar el recurso de apelación para Colpensiones.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, que condenó a Colpensiones al reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la ley 100 de 1993, y en su lugar SE CONDENA a COLPENSIONES al reconocimiento y pago de la indexación de las sumas reconocidas en la sentencia objeto de reajuste pensional desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta el momento en que se realice el pago total de la obligación, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

CUARTO: Las anteriores decisiones se notifican por EDICTO, conforme lo dispuesto en la providencia AL 2550, radicación 89628 del 23 de junio de 2021 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



SECRETARÍA SALA LABORAL
EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

DEMANDANTE	: GUILLERMO LÓPEZ YEPES
DEMANDADO	: COLPENSIONES.
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-013-2023-00105-01
RADICADO INTERNO	: 359-23
DECISIÓN	: REVOCA Y CONFIRMA

Magistrado Ponente
HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN
Fijado el 18 de diciembre de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN
Se desfija el 18 de diciembre de 2023 a la 5:00pm


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO